

Extrait du El Correo

<http://www.elcorreo.eu.org/Colombia-hasta-2014-Guerra-y-crecimiento-sostenible>

Colombia hasta 2014 ¿Guerra y crecimiento sostenible ?

- Les Cousins - Colombie -

Date de mise en ligne : dimanche 17 juillet 2011

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

Durante dos años (1996-1998) ¿mucho antes de instalarse la mesa gobierno-guerrilla en San Vicente del Caguán ?, el grupo Destino Colombia realizó un trabajo prospectivo de análisis de los futuros posibles hacia el año 2014. Este estudio contó con una amplia y diversa consulta de personajes protagónicos, dirigido por los principales grupos de poder político y económico.

El ejercicio arrojó cuatro escenarios posibles para el futuro del país : **I) « Amanecerá y veremos »** : el país se hunde en el caos ; **II) « Más vale pájaro en mano que ciento volando »** : diálogo como salida del « conflicto armado » ; **III) « Todos a marchar »** : un gobierno autoritario para imponer orden, y **IV) « La unión hace la fuerza »** : cambios individuales y colectivos iniciados desde la base social.

La previsión y la organización política, militar, institucional, jurídica y económica del tercer escenario, « Todos a marchar », fueron delineadas sobre la base del fracaso de los diálogos de paz y se caracterizan por un gobierno de mano dura, autoritario y represivo. Según el ejercicio prospectivo, este tipo de gobierno arrojaría los mejores resultados económicos, según la cuantificación de Fedesarrollo, con prioridad del gasto militar en detrimento del social, privilegios al capital nacional y extranjero, privatizaciones y políticas orientadas a la liberalización de los mercados, incremento en la represión, con consecuencias censuradas por la comunidad internacional. Así, las dos estrategias centrales en que descansa el éxito del Plan Nacional de Desarrollo ¿Hacia un Estado Comunitario ? del gobierno Uribe (2002-2006) son :

a). « La seguridad »

b). El ajuste fiscal para generar confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros. La primera se refiere a la capacidad represiva del Estado sobre las organizaciones populares y la declaratoria de guerra abierta contra la insurgencia. La segunda tiene como objetivo realizar un severo ajuste fiscal y asegurar ¿por parte del Estado ? el pago de la deuda pública interna y externa. Sobre estas dos premisas, el proyecto espera la afluencia de caudales de inversión privada, como producto de una mayor confianza en el Estado y el mercado nacionales. La creciente inversión garantizaría un crecimiento sostenido de la economía y, por efecto, un « derrame » de beneficios sociales. Los supuestos que cuantifican el escenario prevén : recuperación de las finanzas públicas, producto de las privatizaciones ; mejoría de los ingresos tributarios ante la reducción de la violencia, fortalecimiento de la inversión extranjera debido a la guerra-pacificación impuesta, sin reformas sociales, y la profundización de las reformas de corte fascista.

Resultados esperados

Según la previsión los resultados del « Todos a marchar », serán :

I) el PIB, la producción de petróleo y los flujos de capital crecen a tasas que superan las registradas en los otros tres escenarios ; **II)** La demanda laboral se incrementa al comienzo, luego cae sustancialmente y se agrava por la falta de inversión social ; **III)** El déficit fiscal se reduce a menos de 2,5 por ciento a partir de 2004 ; **IV)** la inversión extranjera aumenta a más de 6 del PIB en los primeros años, luego se reduce por la oposición externa a la violación de los Derechos Humanos, para nuevamente crecer a ritmo de 3,5 por ciento anual a partir de 2008 ; **V)** la productividad del trabajo y del capital son las más altas de todos los escenarios ; **VI)** crecimiento sostenido del PIB hasta alcanzar una tasa anual de 5 por ciento en 2014 ; **VII)** crecimiento de la demanda laboral entre 3,5 y 4 durante el período 2002-2014 ; **VIII)** ingreso per cápita promedio de 3.000 dólares por habitante para el año 2014. Con esta base, los sectores que prohíjan este escenario concluyen que el autoritarismo y la guerra benefician la acumulación

del capital, más que cualquier otro escenario. Eso, a pesar del costo de la censura internacional por el agravamiento de los indicadores sociales y la violación de los derechos humanos.

1. Modelo exportador y resultados

Las cifras de los resultados en el 2003 parecen exitosas ; pero la prospectiva para los 10 próximos años, con las fisuras que registra el modelo, ciertamente no resultan sostenibles. Durante el año 2003 la economía creció 3,6 por ciento, jalonada por las exportaciones y la inversión privada. Las exportaciones crecieron un 8 (representan 20 por ciento del PIB). Éstas suman US\$ 11.000 millones, a lo que hay que sumarle US\$ 3.000 millones que giran los cuatro millones de personas de la diáspora colombiana en el extranjero (con filtraciones del narcotráfico). Las exportaciones crecen mucho en sectores tradicionales, de poco valor agregado, baja generación de empleo y bajo reintegro de divisas : carbón 55 por ciento, ferróníquel 43,3, café 10,5 y petróleo 4,1. Las exportaciones tradicionales crecieron en un 16,5 por ciento. En contraste, las menores cayeron en 6,2. La ventaja comparativa para el éxito de un modelo exportador se fundamenta en la ampliación de los negocios de las multinacionales, y actividades extractivas, petroleras y mineras. El desempleo nacional disminuyó a 12,3 por ciento, mientras el subempleo se estabilizó en 32. El crecimiento del empleo se registró en actividades poco productivas y de bajo ingreso : familiares sin remuneración, cuenta propia y empleados gubernamentales vinculados al ejército, la policía, organismos de vigilancia e inteligencia. La reducción en el desempleo fue fugaz, producto del ciclo de los negocios de fin de año. En marzo de 2004, la tasa de desempleo nacional volvió a elevarse a 13,6 por ciento (2,8 millones de personas ; esto es, 181.000 desempleados más que en marzo de 2003) y el subempleo se mantiene en 30. El desempleo en las 13 áreas metropolitanas se situó en 16,2 por ciento. La oferta de trabajo aumentó durante 2003 en 4,5 por ciento, y la capacidad de absorción del aparato productivo aumentó en 5,7, un 1,2 más que el crecimiento de la población económicamente activa (PEA). La estrategia de supervivencia de los colombianos que se encuentran en condición de pobreza por ingresos es la de limitar el consumo a lo indispensable de las necesidades humanas. Aun así, el 25 por ciento padece hambre. Hoy, la pobreza por ingresos afecta al 66,3 por ciento de los colombianos, y la distribución del ingreso es bastante inequitativa : el 10 por ciento más rico de los hogares concentra el 46,5 por ciento del ingreso, y el 10 más pobre un 0,8. En consecuencia, el precario crecimiento del consumo se explica por las compras de los sectores socioeconómicos de más alto ingreso en vehículos, muebles y electrodomésticos, ocupación de hoteles y, en general, consumo suntuario (restaurantes, ropa, servicios). Las ventas de alimentos y bebidas no alcohólicas cayeron un 3,2 por ciento en enero de 2004. El ingreso por persona, pese al crecimiento de un 1,6 por ciento de la población, alcanzó a 1.775 dólares, y los principales indicadores de la violencia registraron un ligero quiebre positivo. En contraste, debido al bajo poder adquisitivo de la población, el consumo interno creció apenas un 1 por ciento en 2003. El consumo de los hogares no tuvo crecimiento ; sin la venta de automóviles, el comercio interior hubiera caído un 1 por ciento. La inversión creció en 27 por ciento. Las altas utilidades que registra el sector privado obedecen a la estrategia de seguridad ofrecida por el Estado al capital, junto con la eliminación de los aranceles a la importación de maquinaria y equipo durante 2003. Con excepción del desequilibrio en las finanzas públicas y la revaluación de la tasa de cambio, la estabilidad en otras variables macroeconómicas claves como la inflación y la tasa de interés estimularon la inversión en maquinaria y equipo de transporte, vivienda e infraestructura privada. En cuanto a la oferta, en 2003 la construcción creció un 9,7 por ciento (vivienda suntuaria, edificios y locales ; la vivienda de interés social y las obras civiles permanecen paralizadas). El sector financiero aumentó la cartera comercial en 9 puntos ; el crédito de consumo creció un 22, y las utilidades se duplicaron en dos billones de pesos. Las comunicaciones crecen desde 1999 a más de un 8 por ciento anual. La agricultura se incrementó en un 4 (por buen clima, altos precios, mayor seguridad en las áreas rurales y crecimiento del crédito en 47 por ciento). La minería registró altos aumentos : en carbón fue de 47 del valor exportado (de 35 millones de toneladas en 2002, aumentó a 45 millones en 2003), la energía creció en 3,1 por ciento. La industria tuvo un incremento de 3,1 (por la dinámica del mercado interno en 1,8 por ciento, y en mayor proporción por las exportaciones de textiles y confecciones a Estados Unidos, gracias al acuerdo del ATPA). Las grandes empresas se llevan las palmas. Cien de las 124 compañías inscritas en la Bolsa de Colombia registraron utilidades por \$ 825.746 millones de pesos durante el primer bimestre de 2004, 117 por ciento más que el año pasado. En el mismo período, el sector financiero aumentó sus ganancias en 139 por ciento, con utilidades superiores al medio billón de pesos. Los excedentes del

modelo se concentran en el 10 por ciento de la población. Los usuarios de los créditos del sector financiero deben ceder hasta una tercera parte de sus ingresos para el servicio de las deudas adquiridas (para vivienda y consumo) o para el pago de impuestos que el Estado utiliza para financiar la creciente deuda pública y el escalonamiento de la guerra. Esta situación es cada vez más insostenible desde el punto de vista social y ético. Con una economía que podría crecer en un 3,8 por ciento durante 2004, la concentración del ingreso y la riqueza será mayor y aumentará la polarización de la sociedad colombiana.

Economía y estatuto antiterrorista

El aparente éxito en aspectos económicos y de seguridad del proyecto político de derecha se ambienta con la aprobación del estatuto antiterrorista, con lo cual la restricción drástica de libertades y derechos fundamentales adquiere un fundamento jurídico. Las detenciones masivas, arbitrarias y sin garantías procesales se elevan : en 2003 se afectó a más de 7.000 personas en las zonas escenario de la primera fase de la guerra desatada. No obstante, el número de masacres disminuyó (aunque el total de personas afectadas se mantuvo) y el de personas desplazadas por la violencia bajó de 400.000 en 2002 a 250.000 en 2003. Arauca, territorio petrolero donde operan grandes multinacionales, sirvió de laboratorio de las operaciones militares : operativos gigantescos de despliegue rápido y control central, detenciones masivas bajo sindicación de pertenecer a las guerrillas, incursiones paramilitares en las cabeceras municipales, desmantelamiento de las organizaciones populares, represión sobre líderes sociales y políticos, asesinato de sindicalistas. En el 2004 se implementa en Arauca la táctica de "tierra arrasada", impulsada por el ejército, los paramilitares y la intervención militar estadounidense. La ley y el sistema de justicia se transformaron en instrumentos estratégicos y de legitimación de la guerra desatada por el establecimiento. Además, la impunidad se agrava (99 por ciento en violación de Derechos Humanos) porque la justicia no investiga en profundidad a paramilitares y agentes estatales. Las reformas impulsadas por el Ejecutivo para desmontar el precario Estado Social y Democrático de Derecho, eliminar las libertades y abolir los derechos fundamentales fluyen rápido en el Legislativo, por cuanto la mayoría de congresistas es irrestricta simpatizante y promotora del proyecto impulsado por la extrema derecha. En general, durante el año 2003 la situación de derechos humanos y derecho humanitario continuó agravándose : 19 personas en promedio diario fueron asesinadas, desaparecidas o muertas en combate en razón de la violencia sociopolítica (el promedio de los últimos tres años se mantiene en 7.000). Aproximadamente, el 70 por ciento de los homicidios políticos y de personas socialmente marginadas, lo mismo que de las desapariciones forzadas, se atribuye a agentes estatales o en asocio con paramilitares. A las guerrillas se les atribuye el 30 por ciento. Para 2003, la población desplazada es de 250.000 personas y el acumulado 1985-2004 alcanzará 3,7 millones de afectadas en directo por el desplazamiento forzado. Su aparente disminución frente a los años anteriores se debe a factores que ocultan la realidad : aumento del desplazamiento interveredal e intraurbano ; impedimento en algunas poblaciones a desplazarse (prácticas de emplazamiento y concentración) ; problemas en el registro de población desplazada o por amenazas (por miedo, la gente no declara formalmente su situación) ; incremento en los trámites para acceder a la asistencia humanitaria, que dura hasta seis meses en hacerse efectiva. Además, las fumigaciones indiscriminadas de la lucha antinarcóticos multiplica el desplazamiento forzado de familias campesinas, a la vez que provoca enfermedades y crisis alimentarias en el ámbito local (estas poblaciones no son contabilizadas como desplazadas por la estadística oficial) . Finalmente, la política de retorno del gobierno Uribe no ofrece garantías pero exige la participación de los desplazados en programas de soldados campesinos, red de informantes y familias guardabosques, involucrándolos en el conflicto armado. Las comunidades que no participan en estas tácticas son estigmatizadas. A partir de 2004, la guerra se intensificará en el sur del país mediante el Plan Patriota, que cuenta con apoyo e involucramiento directo del gobierno de los Estados Unidos. En la tercera fase, la guerra se generalizará a todo el territorio. Según documentos del Plan Colombia, el costo humano de la guerra se estima en cuatro millones (9 por ciento del total de habitantes), entre muertos y desplazados, cifra equivalente « según la tecnocracia del establecimiento » a las personas insurgentes o potencialmente opositoras al sistema.

Cifras de la violencia y blanco sindical

En la situación de violencia en Colombia, el número de homicidios descendió de 30.000 a 23.000 entre 2002-2003, y por lo tanto la tasa anual de 68 a 52 por 100.000 habitantes. En esta forma se quiebra la tendencia alcista registrada desde 1998. La estrategia de mayor presencia armada del Estado, los planes de seguridad en las ciudades, el proceso de institucionalización con el paramilitarismo y el repliegue táctico de la insurgencia dan cuenta de estos resultados. Tácticamente, la guerra desatada por el Estado y los paramilitares se orienta a las áreas donde tienen lugar los grandes macroproyectos del Plan de Desarrollo, en espacios de ubicación de las multinacionales, en zonas bajo control insurgente y contra actores estratégicos : sindicalistas, líderes comunitarios, dirigentes de organizaciones populares, minorías étnicas y en general cualquier persona contraria al régimen. En el genocidio político desatado fueron asesinados 2.028 sindicalistas en los últimos 12 años. Durante 2003, 617 sindicalistas fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales : a 90 personas se les negó su derecho a la vida (una tercera parte de los asesinados corresponde a dirigentes de organizaciones) y 20 sufrieron atentados ; en relación con la violación al derecho a la libertad, 42 fueron detenidos, 6 desaparecidos, 6 secuestrados y 91 desplazados ; en relación con la violación al derecho a la integridad, 295 recibieron amenazas de muerte, 55 sufrieron hostigamiento y en 12 casos fueron allanados sus hogares . En los cinco primeros meses de 2004 han sido asesinados 27 sindicalistas, 19 de base y 8 dirigentes ; de éstos, algunos eran trabajadores de empresas multinacionales.

Metas proyectadas del « Todos a marchar »

Sin importar el costo social y la violación generalizada de los derechos humanos, el modelo « Todos a marchar » sigue sin reparo, con anuencia y beneplácito de las élites del país, el gobierno de los Estados Unidos, el capital transnacional y las burocracias del FMI y el Banco Mundial. Con la profundización de la apertura mediante el ALCA o un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el proyecto de la derecha colombiana espera un acelerado crecimiento económico en los próximos años. Los sectores económicos que se prevén como ganadores con la consolidación del modelo son el secundario (reindustrialización y auge de la construcción pública y privada) y el terciario (impulsado por las comunicaciones, la producción de energía, el comercio y el sector financiero). El perdedor sería el sector primario, por la crisis esperada en el campo agropecuario (por la débil capacidad competitiva frente a los productos norteamericanos) y a la drástica reducción en la producción petrolera (aunque se espera una mayor explotación de recursos naturales y biodiversidad). No obstante, en el primer bimestre de 2004, la tendencia hacia la reprimarización de la economía sigue su curso : las ventas de Colombia al exterior crecieron en 11 por ciento respecto al mismo período de 2003, desempeño que se logró gracias a las ventas de productos tradicionales como carbón, petróleo y ferro níquel, que crecieron un 14,9. En el futuro, quienes impulsan el proyecto neoliberal esperan un crecimiento de la economía superior al de la población (en 2015, ésta aumentará en ocho millones, superando los 53 millones, de los cuales un 78 por ciento será urbano y rural un 22). El crecimiento real esperado del PIB para 2004 es de 3,8 ; a partir de 2006, superior al 4, hasta lograr un ritmo del 5 en 2014, con un ingreso de tres mil dólares per cápita. En paralelo, la derecha espera que la violencia reduzca sus tasas respecto del registro de mediados de los 80. En los próximos 10 años, consideran que la maquinaria de guerra del Estado, con apoyo estadounidense, derrotará a la insurgencia y acabará cualquier expresión de resistencia a su proyecto. Finalmente, producto del modelo impuesto y los éxitos económicos y militares, la expectativa de la derecha colombiana apunta a que los niveles de pobreza descendan lentamente y se reduzcan las tasas de desempleo, lo que daría legitimidad al proyecto de « Todos a marchar », compensando los costos financieros, sociales, ambientales, en vidas humanas, en desplazamiento forzado y en violación de los derechos humanos.

2. Fisuras del modelo y guerra al debe

Con los primeros resultados del binomio guerra-negocios, la derecha está entusiasmada y optimista. No obstante, el proyecto hace agua por diversas partes :

I) los problemas estructurales del déficit fiscal y la deuda pública ; II) una guerra al debe con apoyo financiero y

militar de Estados Unidos y el crédito de organismos multilaterales ; **III)** los niveles intolerables de exclusión y pobreza, que afectan a dos terceras partes de la población, y en contraprestación los indignantes niveles de concentración del ingreso y la riqueza en el 10 por ciento de los hogares más ricos ; **IV)** la insostenibilidad ambiental de un modelo basado en la explotación ; **V)** la inviabilidad de un modelo de acumulación mafiosa, sostenido sobre la corrupción, la especulación financiera y el rentismo.

La primera fisura es la crisis de las finanzas públicas. La guerra y el endeudamiento público llevan a la nación por el camino de la ruina. El servicio de la deuda, la regulación y el control del aparato estatal (políticos y tecnocracia), los aparatos de justicia y control ciudadano (DAS, Ejército, Policía, Fiscalía, Inpec) se apropian de dos terceras partes del presupuesto. Para ampliar la capacidad productiva del país, apalancar la acumulación de capital y reproducir la fuerza laboral (gasto social), queda una tercera parte. Los gastos para bienestar social, empleo y medio ambiente representan sólo un 17 por ciento del presupuesto y 9,8 con relación al PIB. El presupuesto general de la nación para 2004 está avaluado en 77,6 billones de pesos. Nominalmente, equivale a un crecimiento de 14,5 por ciento respecto al de 2003. El pago de la deuda pública asciende a 27,8 billones ; 2,2 billones más respecto a 2003. Los acreedores se quedan con un 35 por ciento de las finanzas públicas. Para 2004, la deuda total alcanzará los 140 billones de pesos. El Estado gasta más en financiar la guerra y el abultado peso de la deuda pública de lo que recibe. Por eso, el endeudamiento público crece como espuma. Hoy, las deudas interna y externa del Estado colombiano representan proporcionalmente más de la mitad del PIB anual ; en los próximos cinco años, a pesar de un crecimiento sostenido de la economía y ajustes fiscales, la deuda no descenderá por debajo de 47 por ciento con relación al PIB. El compromiso del Estado con el FMI era reducir el déficit fiscal como porcentaje del PIB de 4 por ciento en 2002 a 2,5 en 2003 ; 2,1 en 2004 y 2 en 2005. En 2003, el déficit del sector público consolidado como porcentaje del PIB fue de 3,1 por ciento, a pesar de múltiples reformas tributarias de la última década. El déficit suma 3,2 billones de pesos. Hacia el futuro, para financiar el colapso de las finanzas públicas se espera una escalada de impuestos (aumento del IVA a los productos de la canasta familiar), impuesto a las pensiones, reducción de transferencias a los entes territoriales (recortes en salud y educación), reforma pensional, despido de empleados públicos y venta de los activos públicos que aún quedan.

La maquinaria de guerra desplaza al gasto social

El gasto social con relación al PIB registra tres fases en la historia colombiana :

I) hasta la Carta de 1991, osciló entre el 6 y el 8 por ciento del PIB ; **II)** con los compromisos del Estado exigidos por una Constitución garantista de los derechos sociales, en proporción del PIB el gasto social se elevó en los 90 hasta alcanzar 16 por ciento ; **III)** con la profunda recesión económica que se inició en 1998, los gastos sociales cayeron hasta representar 10 por ciento del PIB (concentrados en educación, aseguramiento en salud y pensiones). En contraste, el gasto militar, en proporción del PIB, es independiente de los vaivenes de la economía. Aunque en los períodos de mayor represión del Estado sobre la sociedad este rubro se eleva (violencia sociopolítica de mediados del siglo XX, guerra del establecimiento contra el campesinado impulsor de la reforma agraria durante el gobierno de Misael Pastrana 1970-1974, represión del paro cívico de 1977 en el gobierno de Alfonso López Michelsen, estado policial con Turbay, 1978-1982), hasta finales de los 80 representó generalmente alrededor del 3 del PIB. Desde la declaratoria de guerra total contra la insurgencia y con una mayor imposición del neoliberalismo por parte de Gaviria (1990-1994), el gasto militar crece hasta alcanzar un 5 por ciento del PIB en 2003 (sin incluir recursos financieros de la ?ayuda ? militar estadounidense). En medio de la crisis fiscal del Estado y la inestabilidad económica, la prioridad de los grupos de poder es la guerra, en detrimento del gasto social. ¿Con la crisis estructural de las finanzas públicas, hasta dónde es posible sostener los gastos improductivos de la guerra ? . Entre 2000 y 2004, la asistencia de Estados Unidos a Colombia suma US\$ 3.080 millones ; el 81 por ciento corresponde al aparato militar y el 19 para cooptar la población con acciones sociales o humanitarias. Este último rubro (US\$ 580 millones) es controlado directamente por la Embajada y ejecutado por ONG nacionales, con dirección y supervisión directa de empresas privadas de Estados Unidos, en proyectos que tienen como escenario las regiones de mayor conflicto y en sectores que van desde la infraestructura social y los derechos humanos hasta el fortalecimiento de las administraciones

municipales y la cooptación de movimientos étnicos y populares. Para la intensificación de la guerra en 2004, el Congreso estadounidense aprobó el envío de otros 100 militares (para un total de 600) y la contratación sin límites de mercenarios gringos por parte del gobierno colombiano (cada uno gana en promedio unos US\$ 10.000 mensuales).

Corrupción, bomba social

Soborno, concusión y tráfico de influencias son pan diario de las relaciones entre el sector privado y la burocracia estatal. Una encuesta entre 1.600 empresarios organizada por Confecámaras revela que los servidores públicos reciben tres billones de pesos en sobornos, y que cada acto administrativo conlleva una « mordida » del 12 por ciento del monto del negocio. Sólo en el negocio de la salud subsidiada se pierden tres billones de pesos, en un sistema donde la gente simplemente está asegurada pero no recibe servicios de calidad y acordes con la dignidad humana. Según Transparencia Internacional, los sobre costos en compras y contratos llegan cada año a 500 millones de dólares, mientras los desvíos presupuestales ascienden a dos billones de pesos. En el despacho del Procurador hay pendientes 60.000 procesos disciplinarios. La crisis social que afecta a dos terceras partes del país es una bomba que puede explotar. No se trata necesariamente de una explosión política organizada pero podría iniciar un escalamiento de violencia difusa que ya se manifiesta en altos índices de conflicto y delincuencia organizada y común, hasta tocar el espacio intrafamiliar. Endémicamente, la violencia difusa se expande por el territorio y atraviesa todos los estratos socioeconómicos. La hambruna está presente en los principales centros urbanos. Enfermedades endémicas ya superadas resurgen con mayor fiereza. La pobreza y la exclusión son estructurales. Aun en tiempos de auge económico, el índice de pobreza no baja a menos de 50, y el ingreso sigue concentrándose. Esto simplemente no tiene solución en el actual régimen socioeconómico y político. Según evaluación del Banco Mundial en 2001, Colombia no tiene una efectiva red de protección social para enfrentar las consecuencias sociales de las crisis. Históricamente, los gobiernos confían en el crecimiento económico como malla de protección social. Los programas de asistencia, que debieran movilizarse en épocas de crisis, están limitados por restricciones estructurales, incluidas la falta de financiación, la inflexibilidad institucional, decretos desenfocados y una focalización deficiente. El proyecto neoliberal no ahorra fuerzas en manifestar su espíritu de muerte e injusticia. Es improbable entonces que los grupos de poder expresen solidaridad de la noche a la mañana. Por su ideología, prefieren la guerra para defender sus privilegios que financiar la universalización de los derechos sociales más básicos. Su mirada es la rentabilidad y las ganancias de corto plazo.

Insostenibilidad ambiental del neoliberalismo

La ideología neoliberal se preocupa exclusivamente de convertir la naturaleza en materia prima y del uso de los recursos naturales para la producción de mercancías y la acumulación de capital. En general los recursos naturales estratégicos (agrícolas, forestales, hídricos, energéticos y minerales) son controlados directamente por empresas transnacionales. Las regiones de alto valor geoestratégico despiertan el mayor grado de codicia y se ven envueltas en permanentes situaciones de conflicto social, político y militar.

[LE MONDE Diplomatique](#). Colombia, Julio 2011